



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: MARÍA ROSALBA GARCÉS BETANCUR actuando en calidad de curadora legítima de CLAUDIA ALEJANDRA RAMÍREZ GARCÉS.
Demandado: ACP COLPENSIONES
Radicado: 05266 31 05 001 2020 00500 01
Sentencia: S-094

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite al grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de la demandante, con ocasión de la sentencia de única instancia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado el día 23 de agosto de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

CLAUDIA ALEJANDRA RAMÍREZ GARCÉS, quien actúa a través de su curadora legítima MARÍA ROSALBA GARCÉS BETANCUR, demandó a COLPENSIONES para que sea condenada al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por la mora en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada

por la muerte de su padre JOSÉ HORACIO RAMÍREZ DUQUE, junto con las costas del proceso.

LOS HECHOS:

El fundamento para el reconocimiento de las pretensiones, es que el día 6 de junio de 2017 MARÍA ROSALBA GARCÉS BETANCUR solicitó la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor JOSÉ HORACIO RAMÍREZ DUQUE, por su fallecimiento ocurrido el 16 de mayo de ese mismo año; que la entidad demandada le reconoció a aquella el 50% de la prestación mediante Resolución SUB 191087 del 11 de septiembre de 2017, dejando en reserva el restante 50% por el posible derecho que CLAUDIA ALEJANDRA podía tener como hija, requiriendo la documentación necesaria para decidir el derecho; que ésta última solicitó el reconocimiento de la pensión por el fallecimiento de su padre el 25 de junio de 2018; que COLPENSIONES ordenó su reconocimiento según Resolución SUB 231166 del 31 de agosto de 2018, pero dejando en suspenso el pago hasta tanto se allegara la sentencia de interdicción y el acta de posesión de curador; que posteriormente su aportó la documentación requerida; y que COLPENSIONES levanta el suspenso con la Resolución SUB 152032 del 13 de junio de 2019.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDADA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta lo relativo al fallecimiento del señor JOSÉ HORACIO RAMÍREZ DUQUE y todo lo relacionado con los trámites de la pensión de sobrevivientes adelantado por la demandante y su curadora en calidad de compañera permanente del causante, aclarando que para el pago respectivo era necesario allegar la sentencia de interdicción y acta de posesión de curador. Se opuso a las pretensiones por carecer de fundamentación fáctica y legal y como excepciones de fondo propuso improcedencia del pago de intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, improcedencia de

la indexación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 23 de agosto de 2022, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra por la demandante, frente a quien se abstuvo de imponer costas.

Conoce la Sala del asunto por **CONSULTA** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En el término de traslado concedido a las partes, la apoderada de COLPENSIONES hizo uso de su oportunidad legal solicitando se confirme en todas sus partes la sentencia de primera instancia debido a que no se logró acreditar ningún incumplimiento de su parte en el pago de la pensión de sobrevivientes reconocida.

CONSIDERACIONES:

Como viene de verse, la demandante CLAUDIA ALEJANDRA RAMÍREZ GARCÉS pretende el reconocimiento y pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, derivados de la tardanza de la entidad al momento de proceder con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su padre JOSÉ HORACIO RAMÍREZ DUQUE.

Antes de cualquier consideración en torno al tema propuesto, conviene hacer un recuento de lo acontecido en el trámite administrativo para con ello establecer en definitiva el derecho que en este caso pueda existir. Hechos que en su mayoría han sido incluso aceptados por la propia entidad demandada y por ende no han sido materia del litigio.

i. El día 16 de mayo de 2017 falleció el señor JOSÉ HORACIO RAMÍREZ DUQUE, padre de la demandante.

ii. Mediante dictamen N° 70319 del 20 de marzo de 2018 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, se declaró el estado de invalidez de CLAUDIA ALEJANDRA RAMÍREZ GARCÉS con una pérdida de capacidad laboral de 92.29% estructurada el 16 de agosto de 1982.

iii. Que MARÍA ROSALBA GARCÉS BETANCUR solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del causante desde el día 6 de junio de 2017.

iv. Que COLENSIONES ordenó su reconocimiento en un 50% mediante Resolución SUB 191087 del 11 de septiembre de 2017, dejando el otro 50% en suspenso al evidenciar que existía una hija discapacitada del causante con un posible derecho, requiriendo se aporte la información con la finalidad de resolver la situación.

v. El 25 de junio de 2018 se presentó la solicitud de pensión de sobrevivientes por CLAUDIA ALEJANDRA RAMÍREZ GARCÉS, la cual fue resuelta por medio de la Resolución SUB 231166 del 31 de agosto de 2018. En ese acto administrativo se reconoció el 50% de la pensión de sobrevivientes que se había dejado en reserva, pero condicionando su pago al momento en que se allegue la sentencia de interdicción y el acta de posesión de su curador.

vi. Posteriormente se presenta una nueva solicitud con la que se adjunta la sentencia judicial del Juzgado Primero de Familia de Itagüí a través de la cual se declara interdicción y se nombra como curadora a su madre MARÍA ROSALBA GARCÉS BETANCUR, así como el acta de posesión del 7 de mayo de 2019.

vi. Con base en lo anterior, se profirió la Resolución SUB 152032 del 13 de junio de 2019 mediante la cual se ordena el pago del 50% de la pensión reclamada a partir del 16 de mayo de 2017, ordenando el pago de un retroactivo pensional por valor de \$29'010.905 que se ordenó ingresar en nómina de julio de ese mismo 2019.

Lo primero que se debe advertir para resolver la situación planteada con la demanda, es que la norma que consagra los intereses moratorios propende por el pronto pago de las mesadas pensionales para así proteger los derechos de los pensionados frente a las dilaciones injustificadas en el trámite administrativo. Intereses que a la luz del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, son procedentes en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley y su pago se realizará a la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

El sentido o conceptualización de los intereses moratorios en general, tiene que ver con que su causación se da una vez vencen los plazos pactados por las partes, u otorgados por la ley como en este caso acontece, a manera de sanción al deudor incumplido. Se incurre en mora, bien cuando no se ha cumplido la obligación dentro del término estipulado por la ley o el contrato o convención, o bien cuando la deuda debió ser ejecutada dentro de cierto tiempo, por haberse fijado un término o señalado un plazo para ello, y el deudor lo ha dejado vencer, sin cumplirla o ejecutarla. Eventos en los cuales se genera la obligación al pago de los intereses por mora, contrario a lo dicho por la recurrente-, como forma de reparación del perjuicio sufrido por el acreedor ante el incumplimiento del deudor, o simplemente ante su cumplimiento tardío, inoportuno o extemporáneo.

Ahora bien, se hace necesario recordar que la Ley 700 del 7 de noviembre de 2001, en su artículo 4º, estableció en un comienzo que los operadores del Sistema General de Pensiones que tienen a su cargo el reconocimiento de derechos pensionales, tendrían un término

de 6 meses contados a partir de la solicitud para adelantar los trámites tendientes al pago de las mesadas. Sin embargo, según la Ley 717 del 24 de diciembre de ese mismo año – 2001 - artículo 1º, norma posterior y que regula lo relacionado con los intereses moratorios para el caso específico de las pensiones de sobrevivencia, el reconocimiento de la prestación debe hacerse 2 meses después de efectuada la reclamación, so pena de soportar el pago de los intereses moratorios durante el tiempo que se tarden para realizar el pago efectivo de la obligación.

En el presente caso, según la prueba documental aportada al proceso, ha quedado acreditado que la demandante CLAUDIA ALEJANDRA RAMÍREZ GARCÉS se presentó ante COLPENSIONES a reclamar la pensión de sobrevivientes desde el 25 de junio de 2018, mientras que la prestación apenas se vino a comenzar a pagar luego de la expedición de la resolución SUB 152032 del 13 de junio de 2019.

Sin embargo, como bien lo entendió el funcionario de primer grado, COLPENSIONES tenía una justificación válida para haberse tardado en el pago del derecho pretendido, erigiéndose como una causal de exoneración de los intereses reclamados el hecho de exigir una documentación completa, que fue lo que ocurrió con la Resolución SUB 231166 del 31 de agosto de 2018.

Ocorre que la documentación requerida por la entidad, se constituía en la sentencia judicial proferida por la jurisdicción de familia en la que se designara curador (a) de la peticionaria, dadas las circunstancias especiales de la condición de invalidez e interdicción de la demandante CLAUDIA ALEJANDRA. Requisito exigido con fundamento en que el dictamen 070319 del 20 de marzo de 2018 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, estableció una pérdida de capacidad laboral de 92.29% y se registró la necesidad de ayuda de terceros para la toma de decisiones.

En esas condiciones, teniendo claro que no puede tomar decisiones por cuenta propia, esto es, carece de autodeterminación debido a la patología que le fuera diagnosticada, resulta atendible que se le exigiera, antes de proceder con el reconocimiento de la prestación y poner a su disposición los dineros correspondientes, acreditar la declaratoria de interdicción para que fuera a través de quien se designara como curadora legítima, que se comenzaran a realizar los pagos por concepto de mesadas pensionales.

No se desconoce que según el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, concretamente en su literal c, los hijos inválidos del causante son considerados beneficiarios de la pensión de sobrevivientes siempre y cuando dependan económicamente de éste, es decir, para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes solo se exige que ese hijo inválido acredite haber sido declarado en esa condición, lo que implica una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, sin que allí se contemple como condición que se haya declarado mediante sentencia judicial su interdicción con la respectiva designación de un curador.

Pero de lo que se trata en este caso no es de definir la procedencia o no del derecho, eso no tiene discusión alguna; la entidad ya está pagando las mesadas pensionales y lo viene haciendo desde la Resolución SUB 152032 del 13 de junio de 2019 cuando declaró su calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, ordenando incluso el pago retroactivo de las mesadas pensionales desde el fallecimiento del señor JOSÉ HORACIO, hecho ocurrido el 16 de mayo de 2017. La cuestión es si COLPENSIONES en el momento de estudiar la solicitud debía, inobjetablemente, reconocer y pagar la pensión.

Y la respuesta que tiene la Sala a ese interrogante es que no necesariamente. En ese momento la entidad actuó con mesura, y no le era exigible una conducta distinta, pues, en lugar de desconocer los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad,

y bajo las características que presentaba la demandante, con dicha decisión lo que se pretendió fue garantizar la protección de su derecho al mínimo vital y a la seguridad social en la medida que, en frente de una persona que requiere de terceros para tomar decisiones, lo conveniente era abstenerse de ordenar el pago de unas mesadas pensionales que eventualmente hubieran podido tener una destinación distinta a su finalidad.

Se quiere significar con lo anterior, que no deben medirse con el mismo rasero todos las posibles causales de invalidez, pues no sería igual negarle la pensión de sobrevivientes por su condición de hija inválida que sufre de una discapacidad física, pero con sus facultades mentales intactas, que a aquella persona que padece de una invalidez mental al punto que los especialistas dictaminen que requiere de terceras personas que decidan por ella.

Vale decir, la mejor forma de salvaguardar aquellos recursos era exigir la declaratoria judicial de interdicción y el nombramiento de curador (a), para que, a través de la persona designada por el juez natural, encargada no solo de la toma de decisiones como lo determinaron los médicos especialistas que hicieron la valoración, sino también del manejo de sus bienes, se pudieran hacer los pagos que por concepto de pensión de sobrevivientes fuesen procedentes.

Es por ello que resulta aplicable el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a través del cual ha indicado que si la entidad tenía argumentos jurídicos valederos para adoptar determinada decisión y obró en virtud de los requisitos propios que exige la ley para tales efectos, no está obligada al reconocimiento de los intereses de mora que se reclaman. Así lo ha indicado en múltiples providencias como la 13388 del 1º de octubre de 2014, reiterada en la SL 2941 de 2016, SL 3707 del 1 de agosto de 2018, rad. 50665, la SL 4794 del 6 de noviembre de 2019 o la SL 5673 del 1 de diciembre de 2021, rad. 84517.

En consecuencia, la decisión de primera instancia será confirmada.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado el día 23 de agosto de 2022.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c3ecdb2e636fb1e47c270dc96c0afcb21eba572021f4fc8949bc43b7bffa15db**
Documento generado en 13/04/2023 01:48:20 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>